



Galería de Papel. Expedientes, fragmentos de un país Juan Toro Díez (2015).

## ABSTRACT

*In this work we will review the policies of access to public information in 22 countries of the American continent and how it is in practice to exercise this fundamental right in each of these nations. The text is made in two deliveries; this first part contains the analysis of Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador and El Salvador. Throughout the investigation, not only the laws that exist in the countries are investigated, but also their execution, the decisions that may affect in some way the right to free access to information and its comparison with the standards international.*

# El derecho a saber: una mirada en las Américas

(PARTE I)

---

LEÓN HERNÁNDEZ • CARLA ZAMBRANO

---

En este trabajo revisaremos las políticas de acceso a la información pública en veintidós países del continente americano y cómo es en la práctica el ejercer este derecho fundamental en cada una de estas naciones. El texto se realiza en dos entregas; esta primera parte contiene el análisis de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador y El Salvador. A lo largo de la investigación, no solo se indaga en las leyes que existen en los países sino en la ejecución de las mismas, las decisiones que puedan afectar de alguna manera el derecho al libre acceso a la información y su comparación con los estándares internacionales.

## INTRODUCCIÓN

¿Cómo se aplica el derecho al acceso a la información en los países de América? Mucho se ha legislado, constituido, pero, en la práctica, ¿cómo opera esta base democrática en los Estados del Hemisferio? ¿Se garantiza el principio de transparencia, más allá de la letra en sus constituciones o leyes sobre la materia?

La primera luz en Hispanoamérica sobre dar carta abierta a un requisito primordial para el derecho a libertad de expresión que diera acceso, entonces, a las opiniones de los otros —aunque esto no involucrara la obligatoriedad de los regentes a dar a conocer lo que fuere de interés público—, deviene de la Monarquía española, específicamente de la Constitución de Cádiz, de 1812. Esta, que eliminaba la inqui-

sición dando la soberanía a la nación, y fue la primera promulgada por España, tuvo vigencia únicamente por tres periodos cortos: primero de dos años, desde su emisión en 1812 hasta su derogación en 1814, luego en dos periodos más, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837 (Wikipedia, 2022). Imponía la libertad de imprenta en su artículo 371:

Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. (Constitución de España de 1812)

## ESTUDIOS

En 1876, la Constitución de la Monarquía Española, en su artículo 13, señalaba que:

Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. (Constitución de España, 1876)

Pero no establecía el derecho a investigar y a recibir la información. La primera formulación al respecto deviene de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, refiere, en su artículo 19, que:

Todo individuo tiene derechos a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos)

**Un ciudadano cuyas comunicaciones no tengan capacidad de acceso a las evidencias sobre el ejercicio político, carece de las herramientas necesarias para ejercer su derecho a la democracia y tiene, por tanto, un déficit de libertad importante.**

Se habla, en esta declaración, de buscar, recibir, investigar. No obstante, en algunos países de las Américas tal principio se incumple, por omisión o violación. Aun cuando así estipulado también está en las constituciones, la falta de acceso a la información pública en no pocos países de la región acarrea consecuencias en la comunicación, especialmente en un hemisferio con olas de experimentos de modelos autoritarios y prácticas restrictivas.

El principio de acceso a la información pública y la democracia han sido vinculados en documentos refrendados por entes de diversa naturaleza y se han realizado diversos intentos para incentivar a la región a aplicar esta máxima garante de las libertades. En 2004, la

Unesco presentó una *Propuesta de ley marco o modelo sobre el acceso de los ciudadanos a la información pública*, que se basaba en los avances constitucionales que en la materia habían surgido en la región. La Organización de Estados Americanos, en documento que publica en 2013 y titula *Acceso a la Información Pública: un derecho para ejercer otros derechos*, acota que en el mismo desarrollo de los Estados modernos, con enfoque de un Estado como base de interés general, era requerimiento el acceso a la información pública para los ciudadanos, como requisito indispensable para toda democracia (OEA, 2013).

Estrada (2004) refiere que el ‘secreto’, ‘secretismo’ o ‘reserva’ de la información pública “tiende a desaparecer”, aunque admite que lo hace de forma “lenta y dificultosamente”. En el caso de América Latina, advierte que esta adopción de medidas sucede ante “... complejos problemas para lograr la accesibilidad, cantidad y calidad de la información oficial”.

Hoy día, se encuentra sobre el tapete la adopción de leyes en esta materia, en medio de irrespetos a esta garantía vital para el desarrollo democrático. El periodismo y el ciudadano tantean fórmulas para obligar al Estado a hacer más publicidad de lo público, y en ese debate estamos.

Bernard Williams, en su libro *Truth and truthfulness: an essay in genealogy* (2002), señala que la veracidad está compuesta por dos elementos esenciales: la sinceridad y la precisión. Basta esta aseveración para entender que no puede haber contenidos ciento por ciento veraces en el hacer periodístico, sin acceso a la información pública. Un periodista sin acceso a la información está obstruido en su quehacer y la sociedad, limitada en su derecho a saber.

Un ciudadano cuyas comunicaciones no tengan capacidad de acceso a las evidencias sobre el ejercicio político, carece de las herramientas necesarias para ejercer su derecho a la democracia y tiene, por tanto, un déficit de libertad importante.

En la mayoría de los usos del término ciudadano, se habla de una persona que más allá de ser un mero habitante de un país, se hace del goce de derechos y ejerce sus deberes. Hay teó-

ricos que han echado mano de la concepción liberal de la democracia, coincidiendo en que esta solo es posible con ciudadanos que puedan monitorear la eficiencia de su gobierno, con libertad para pedir cuentas a sus gobernantes, capaz de decidir sobre la base de su saber en torno a la cosa pública. Esto, sencillamente, no se puede cumplir sin el derecho al acceso a la información pública.

Pero, ¿qué se entiende por información pública y por este derecho? Hay variaciones y limitaciones legales dependiendo del contexto, pero todas apuntan a la transparencia y al principio de máxima divulgación de todos los datos que generan, obtienen y controlan los organismos del Estado, empresas y particulares vinculados a este.

La Ley de Acceso a la Información Pública propuesta por la Unesco, define a la información pública como:

[...] aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

El derecho a esa información puede ser conceptualizado como aquel que:

[...] tiene todo individuo a que toda entidad que ejerce funciones públicas –comprendiendo la información que produzcan o posean las empresas privadas que prestan servicios públicos– proporcione o brinde la información que un ciudadano solicite, la cual puede haber sido producida por dicha entidad o estar en poder de esta aunque no la haya producido de manera directa. (Novoa Curich, 2016)

Se entiende la información pública como toda aquella que involucre a los intereses sociales, económicos, políticos y administrativos del Estado. Este acceso es lo que deriva en transparencia y esta cualidad del individuo en la conformación inherente de ser ciudadano. Por tanto, un habitante pierde la condición de

ciudadano cuando se le priva de acceso a la información a la que tendría derecho de conocer, a la información sobre la cosa pública.

Sin información no es posible exigir al Estado el respeto de los derechos ni del adecuado funcionamiento de la administración pública. También permite que el derecho a la libertad de expresión sea ejercicio y es que solo cuando se cuenta con información necesaria y adecuada, es posible emitir una opinión o manifestar información en lo que se refiere a hechos que, en este caso específico, estén vinculados al ejercicio de la función pública o a la administración pública en general. (Novoa, 2016)

**En el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, impulsada por la SIP desde 1994, se establece que “... las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.**

En la década de los 90, la Sociedad Interamericana de Prensa avanzó en ideas para ponerle pies a este principio. El ente promovió la incorporación de leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos, estimulando condiciones y características esenciales para su implementación: organismos autónomos con normas para evitar el impacto de intereses políticos o de los funcionarios de turno, fundamentos que favorecieran la apertura y transparencia, así como regímenes de excepciones previamente establecidos que previnieran arbitrariedades, métodos expeditos de entrega de información, infraestructura necesaria y responsables que hicieran hacer cumplir la ley.

En el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, impulsada por la SIP desde 1994, se establece que “... las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

## ESTUDIOS

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por 184 países desde su aprobación en la Asamblea General del 31 de octubre de 2003, contempla disposiciones referidas al acceso a la información pública en su artículo 10, exhortando a cada Estado a adoptar “... las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública”, acciones que podrían incluir procedimientos o reglamentos que permitan al público obtener la información sobre la administración pública:

[...] con el debido respeto a la protección de intimidad y de los datos personales; la simplificación de los procesos para facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones y la publicación de información sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.

**La Constitución gaucha de 1819 hablaba, en el artículo 111, sobre la libertad de prensa como algo “esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado”, pero no existió nada sobre el acceso a la información pública hasta las reformas de 1994**

Bases sobre cómo debieran operar los responsables y entidades garantes del acceso a la información pública han sido emanadas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el ente multilateral, un organismo que garantice el acceso a la información pública debería contar con un diseño institucional que lo haga resistir la influencia política y gozar, para ello, de la independencia necesaria. Lo sugerido es que se trate de un organismo colegiado y con una duración de mandato razonable (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016).

También la Organización de Estados Americanos ha recomendado que el órgano garante de acceso a la información pública sea establecido a nivel constitucional, no subordinado a poder alguno, colegiado o que cuente con mecanismos de rendición de cuentas. (Comité Jurídico Interamericano de la OEA, 2020).

En esta entrega recorreremos la situación de este derecho en doce Estados del Hemisferio, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, El Salvador.

## ARGENTINA

En Argentina, las leyes, acuerdos que garantizan el libre acceso a la información pública y los organismos que se encargan de velar el cumplimiento de las mismas, no garantizan del todo el acceso a la información en la nación. No obstante, se observan algunos avances de 2021 a 2022.

La Constitución gaucha de 1819 hablaba, en el artículo 111, sobre la libertad de prensa como algo “esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado”, pero no existió nada sobre el acceso a la información pública hasta las reformas de 1994, cuando se reglamentó este derecho como derivado de los artículos 1, 33, 38, 41 y 42, entre los que destaca la mención al derecho que tienen los partidos políticos al libre acceso a la información pública y además, el deber que tienen de hacer públicos el origen y destino de sus fondos (artículo 38), así como el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz.

Igualmente, dicha reforma constitucional le otorgó desde entonces jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que han garantizado el acceso a la información pública, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

En 2003 se aprobó el Decreto 1172/2003 que garantizaba, entre otras cosas, la Publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, el Acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional y de Reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas.

Entre 2004 y 2005 se abordó en el Parlamento un proyecto de ley que, si bien tuvo me-

dia sanción en la Cámara de Diputados, tras las modificaciones realizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, fue engavetado. Años más tarde, en 2010, otro proyecto de ley se estancó al pasar la Cámara de Diputados. Tras estos intentos y luego de tener más de una docena de proyectos de ley sobre el tema (Oyhanarte & Mora, 2015), en 2016 se promulgó la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza que cualquier persona pueda pedir la información sin explicar el por qué. Dicha solicitud se deberá hacer por escrito, indicando el nombre del solicitante, la información precisa que necesita y el lugar donde pueden enviársela o avisar que ya está disponible. Al realizarla, se le entrega una constancia del pedido. También se establece que este acceso es principalmente gratuito, a menos que una norma autorice el cobro de un arancel y de ser necesario sacar copias, el costo corre por parte del solicitante. De ser negada la solicitud deben explicarse las razones, la misma puede ser apelada al realizar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública y/o ante el organismo que niega el acceso.

Muchas son las formas que utilizan los diferentes entes gubernamentales para impedir el acceso a la información pública, sobre todo en las provincias de Argentina. Para 2020 y 2021, en la provincia de Formosa se impedía a los periodistas de diferentes medios nacionales, como a las periodistas Inés Beato Vassolo, Paula Bernini y su equipo, el acceso por la frontera provincial y la “libertad para cubrir las noticias sin seguimiento policial”, lo que obstaculizaba el acceso de los ciudadanos a la información (Fundación Led, 2021).

Igualmente, según un informe publicado en 2022 por la Auditoría General de la Nación (AGN), entre 2018 y 2019 se observaron incoherencias entre la cantidad de solicitudes en la base Dataset y las presentadas por la agencia, así como 1.965 solicitudes contestadas fuera de término y la demostración de una gran falta de herramientas que garantizaran efectivamente la transparencia y el acceso a la información pública. La AGN también denunció que el Con-

sejo Federal para la Transparencia no cumplía de forma adecuada sus funciones (Fernández Beltrán, 2022).

Entre las tácticas también destaca la censura a través de las inversiones en publicidad, donde tanto el gobierno como las grandes empresas utilizan sus presupuestos para publicidad como forma de coacción a los medios, disminuyendo o retirando las mismas de aquellos que les sean contrarios y beneficiando a los que están a su favor, cayendo en “... la práctica de premios y castigos para orientar opiniones y procurar silencios” (Colombié & Lacunza, 2022), lo que es otra forma de privar a los ciudadanos de su derecho al libre acceso a la información y a la libertad de prensa.

**La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza que cualquier persona pueda pedir la información sin explicar el por qué. Dicha solicitud se deberá hacer por escrito, indicando el nombre del solicitante, la información precisa que necesita y el lugar donde pueden enviársela o avisar que ya está disponible.**

## BOLIVIA

Bolivia es uno de los dos países de Latinoamérica que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, junto a Cuba. En su Constitución vigente desde 2008 se garantiza el acceso a la información pública en sus artículos 21.6, 106 y 242.4. El primero de estos señala que los bolivianos y bolivianas tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

El artículo 106 de la Constitución de Bolivia, reza:

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

## ESTUDIOS

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Por último, el artículo 242.4, relativo a la participación y el control social del pueblo boliviano, destaca que esto implica generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos y que, además, la información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

### **Las falencias en el ámbito comunicacional en la pasada administración de Jair Bolsonaro dejaron a la nación amazónica con un bajo nivel en lo que respecta al acceso a la información pública, de acuerdo con expertos consultados para la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa**

A pesar de no contar con una ley, sí han sido emitidos dos decretos sobre el acceso a la información pública, a saber, DS N°28168 y DS 0214. El primero de estos, vigente desde 2003, establece que toda entidad del Poder Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que solicite cualquier persona, sin discriminación alguna, y que el acceso a la información es gratuito, aunque los costos de reproducción deben ser cubiertos por el solicitante. Deja en manos de los entes del Estado la organización y normas para la entrega de la información, sin establecer mecanismos claros que garanticen esta entrega al ciudadano.

Por otra parte, el decreto DS N°28168 descarta cualquier posible sanción a los funcionarios que suministren información a los solicitantes. El segundo de los decretos indicados, DS 0214, es relativo a la transparencia y lucha contra la corrupción y establece que uno de los ejes estratégicos en la materia es el acceso a la

información pública, sin dar mayores detalles al respecto.

Aspectos políticos, según denuncia la prensa local, han alejado la posibilidad de que el Parlamento apruebe una ley en la materia. El país evidencia una política poco conducente a un libre acceso a la información pública, según expertos locales consultados para el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

### **BRASIL**

En la Constitución Federal de Brasil se establece como derecho el acceso a la información (Art. 5º, incisos XIV y XXXIII; Art. 37, § 3º, inciso II; y Art. 216, § 2º):

Art. 5º. [...] XIV - Es asegurado a todos el acceso a la información y resguardado el sigilo de la fuente, cuando necesario al ejercicio profesional;

Art. 5º. [...] XXXIII - todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán prestadas dentro del plazo de la ley, bajo pena de responsabilidad, exceptuadas aquellas cuyo sigilo sea imprescindible a la seguridad de la sociedad y del Estado;

Art. 37, § 3º [...] II - el acceso de los usuarios a registros administrativos y a informaciones sobre actos de gobierno, observado lo dispuesto en el art. 5º, X e XXXIII;

Art. 216 [...] § 2º - Cabe a la administración pública, en los términos de la ley, la gestión de la documentación gubernamental y las providencias para permitir su consulta a todos aquellos que de ella necesiten.

Adicionalmente, Brasil sí cuenta con una Ley de Acceso a la Información (Lei nº 12.527/2011 - LAI), que regula el derecho de acceso a la información pública, se mantiene en vigencia desde el 16 de mayo de 2012 y establece que toda persona tiene derecho de recibir informaciones de todo órgano público.

No obstante, acciones gubernamentales y decretos en la materia, han implicado restricciones en el acceso a la información pública en la nación. Un incidente a destacar en data recién-

te fue el decreto 9.680, que entró en vigencia el 24 de enero de 2019, y que establecía que altos funcionarios, representantes de empresas públicas y de economía mixta podían decidir si un documento es reservado, secreto o ultra-secreto, limitando el acceso a la información pública. El instrumento fue considerado como un retroceso y el 26 de febrero de 2019 el propio presidente de Brasil para ese entonces, Jair Bolsonaro, lo derogó (SIMÕES, 2019). (Borges, Martínez, Rodríguez, 2020).

Las falencias en el ámbito comunicacional en la pasada administración de Jair Bolsonaro dejaron a la nación amazónica con un bajo nivel en lo que respecta al acceso a la información pública, de acuerdo con expertos consultados para la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que colocó al Ejecutivo nacional como el principal poder involucrado en situaciones adversas a la libertad de expresión, en las ediciones de 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Durante su mandato, los periodistas –especialmente las comunicadoras– fueron blanco de agresiones verbales (SIP, 2022).

Informes de Amnistía Internacional destacan que el Ejecutivo carioca deliberadamente desinformó sobre el estatus y tratamiento necesario contra la COVID-19, mientras el gobierno mostraba hostilidad hacia la prensa y críticos a la gestión. “En 2021, la organización Human Rights Watch identificó 176 cuentas de periodistas, miembros del Congreso Nacional, influencers, medios de comunicación y ONG –entre ellas Amnistía Internacional Brasil– bloqueadas en las redes sociales del presidente Bolsonaro” (Amnistía Internacional, 2022).

## CANADÁ

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, Canadá ha “experimentado una caída significativa en los últimos diez años”, pasando de tener 84 puntos de 100 en 2012 a tener 74 solo nueve años después y con una diferencia de tres puntos con el año 2020. Sin embargo, se mantiene entre los primeros quince países del

*ranking* y, de acuerdo con los expertos consultados para el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, el acceso se ha incrementado entre el ejercicio 2020-2021 y 2021-2022.

**[...] si bien existe la ley y las iniciativas para el libre acceso a la información pública, han habido quejas de las organizaciones de la sociedad civil y los medios por la demora en la entrega de la información o la entrega editada de la misma.**

No obstante, si bien existe la ley y las iniciativas para el libre acceso a la información pública, han habido quejas de las organizaciones de la sociedad civil y los medios por la demora en la entrega de la información o la entrega editada de la misma.

La Ley de Acceso a la Información de esta nación establece que para solicitar información debe hacerse por escrito, proporcionando la mayor cantidad de detalles posibles para que se pueda identificar. La institución cuenta con treinta días para responder si el acceso se dará o se negará y, de aceptarse la solicitud, dar a la persona el acceso al registro o parte de la información. Este lapso puede ser prorrogable en un “período de tiempo razonable”. De ser denegada la solicitud, se puede presentar una queja al Comisionado de Información. La persona solicitante puede verse en la obligación de pagar una tarifa de solicitud, no mayor a 25 dólares canadienses; una tarifa por la reproducción, de ser necesaria y según lo establecido en el reglamento; y una tarifa cuando este registro se convierta a algún formato alternativo. Igualmente, el director de la institución podrá exigir un pago por la cantidad de cada hora, después de exceder cinco horas, por la búsqueda del registro.

El primer trimestre de 2022 la Federación de periodistas de Quebec solicitó una revisión de la Ley de Acceso a la Información, luego de que un periodista de *Radio-Canadá* recibiera documentos editados, algo que el presidente de

## ESTUDIOS

la federación, Michaël Nguyen, dijo que “sucede regularmente”. Esta situación se ha repetido con *Radio-Canadá* un par de veces; anteriormente, luego de solicitar unos documentos sobre los gastos por la pandemia; y en esta ocasión, sobre una opinión ética de Salud Pública en torno a restablecer el toque de queda para reducir los casos de COVID-19. La federación hizo el llamado porque siempre se menciona la necesidad de actualizar la ley, pero al final “nunca se hace mucho” (*CBS News*, 2022).

**El primer trimestre de 2022 la Federación de periodistas de Quebec solicitó una revisión de la Ley de Acceso a la Información, luego de que un periodista de Radio-Canadá recibiera documentos editados, algo que el presidente de la federación, Michaël Nguyen, dijo que “sucede regularmente”.**

Por esta línea, las organizaciones civiles como OpenMedia denunciaban que la información suele llegar tarde, lo que va en contra de la transparencia, dado que la necesidad del acceso a la información sirve para hacer que la democracia “rinda cuentas públicamente mientras está funcionando” (Short, 2022). OpenMedia informaba que en 2021 hizo una encuesta al no quedar conforme con la que había realizado el Departamento de Justicia sobre la reforma a la Ley de Privacidad. La ONG, para poder compararlas, envió una solicitud para obtener los resultados, pero la información estaba en un formato no legible. Al momento de pedir que se les enviara la información en otro formato se les dijo que era técnicamente imposible, por lo que interpusieron una queja al Comisionado de Información de Canadá, quienes tardaron más de un año en responder la denuncia, por lo que se comunicaron con el Departamento de Justicia y consiguieron que se les enviara la información inmediatamente.

Cuando se les preguntó qué había cambiado para que algo “prácticamente imposible” se lograra, el organismo no dio una respuesta satisfactoria para la organización. OpenMedia afirmaba que este cumplimiento técnico a la larga

era obstrucción y daba pie a que los ciudadanos creyesen que lo que cambió es que la información ya no era útil y por ello ahora sí permitían el acceso. Para la organización esto “... afecta los derechos y la participación en la toma de decisiones públicas”. La iniciativa de análisis de medios, no obstante, guardaba la esperanza de que con el estudio que realiza el Parlamento sobre el sistema de acceso a la información se incluyera una evaluación de la forma en la que los departamentos proporcionan este derecho (Short, 2022).

Sobre esto, la comisionada federal de información, Caroline Maynard, dijo que entre enero y octubre de 2022 se registró un récord de 10.000 quejas y que los sistemas de libertad de información habían colapsado. Para Maynard, todos los departamentos luchan por mantenerse al día, pero “nadie lo está haciendo muy bien”. En 2021, el 30 % de las solicitudes fue respondida a destiempo. Maynard subrayó los diferentes problemas en el sistema canadiense: las demoras, las redacciones y la legislación obsoleta (*The Global and Mail*, 2022).

Por otro lado, la población tiene bastantes iniciativas e interés sobre el acceso y la democratización de la información. Un ejemplo de esto es la investigación que realiza *The Globe and Mail* sobre sistemas de libertad de información. Esta tarea de análisis se llama Secret Canada, profundizará en los problemas a diferentes niveles y explorará las posibles soluciones. También está la creación del Portal de Investigación de Inmigración Canadiense, un mapa digital que permite acceder a los datos migratorios de la nación, acercando esta información al público. Este mapa interactivo fue creado por la Dra. Lori Wilkinson en asociación con investigadores del Canadian Hub for Applied and Social Research (CHASR) de la Universidad de Saskatchewan y es un paso para el acceso a la información por parte de los ciudadanos (University of Saskatchewan, 2022).

## CHILE

Según el *ranking* de Reporteros sin Frontera (RSF) sobre libertad de prensa de 2022, Chile se ubica en el lugar 82 en cuanto a la libertad de

expresión, un descenso de veintiocho puestos en comparación con el informe publicado el año anterior. En el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, la nación descendió del segundo al sexto puesto, para la edición pasada, en el periodo comprendido entre agosto de 2021 y agosto de 2022.

Como muchos otros países del continente, la situación de los derechos de libertad de expresión y prensa y el libre acceso a la información pública se vio vulnerada durante la pandemia. El informe de “Libertad de expresión en Chile” de 2021, realizado por la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile, daba cuenta de las vulneraciones a estos derechos: presiones a los medios, acoso legal a las voces críticas, falta de transparencia con la información de la COVID-19 (Universidad de Chile, 2022).

La Ley número 20.285 sobre el Acceso a la Información Pública indica que toda solicitud de acceso debe hacerse por escrito o por correo electrónico y debe contener:

- a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
- b) Identificación clara de la información que se requiere.
- c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
- d) Órgano administrativo al que se dirige.

(Artículo 12, Ley sobre Acceso a la Información Pública)

El ente tendrá veinte días hábiles para contestar la solicitud, este plazo podría extenderse de manera excepcional por otros diez días hábiles. De ser negada la solicitud, se debe informar y explicar al interesado por escrito. La institución solo podrá exigir pago de los costos de reproducción y de los “demás valores que una ley expresamente autorice” por la entrega de la información.

La Convención Constitucional integró, a inicios de 2022, diversas normativas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información. Algunos de los artículos aprobados fueron: el principio de transparencia, el principio

de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública, cuestión que el Consejo para la Transparencia (CPLT) había planteado en 2021.

A pesar de que las leyes chilenas comprometen a los entes públicos a la transparencia de la función pública, desde la aprobación de la ley, esta se ha visto vulnerada varias veces. En 2011 el diario *El Mostrador* comentaba que, según el estudio *Obstáculos a la información pública: una revisión de casos ciudadanos*, en la práctica existían barreras para el acceso a la información. Algunas de estas eran: las fallas en las páginas web de algunos organismos públicos, petición de datos que no se encuentran en la ley, fallas con los *links*, entregas fuera de los lapsos de tiempo, violaciones a los procesos establecidos en la ley, el hostigamiento a los solicitantes y la negación excesiva de solicitudes con argumentos débiles (*El Mostrador*, 2011).

**El informe de “Libertad de expresión en Chile” de 2021, realizado por la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile, daba cuenta de las vulneraciones a estos derechos: presiones a los medios, acoso legal a las voces críticas, falta de transparencia con la información de la COVID-19 (Universidad de Chile, 2022).**

Aparte de esto, durante el estallido social ocurrido entre octubre y noviembre de 2019, un informe publicado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, con el apoyo de académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile afirmó que existieron múltiples violaciones al derecho de libertad de expresión lo que, por consecuencia, impedía el libre acceso de los ciudadanos a información importante. Desde bloqueo de cuentas de 280 usuarios, hasta la obstrucción al acceso a la información sobre detenciones y heridos (*El Mostrador*, 2020).

Sobre esta situación el informe de la FCEI comenta que no se logró acceder a la información relacionada con las reuniones del presidente y

## ESTUDIOS

los medios de comunicación durante el estallido social (Universidad de Chile, 2022).

## COLOMBIA

En Colombia se han ratificado todas las declaraciones que consagran el derecho al acceso a la información, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Adicionalmente, a lo interno, este principio es establecido en el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana, que garantiza el derecho a recibir información veraz e imparcial, y el 74, que permite a los ciudadanos acceder a los documentos públicos, con excepción de los casos que establezca la ley (Fundación para la Libertad de Prensa, 2011).

**En Colombia existen organismos que facultan las solicitudes de acceso a la información pública de periodistas y ciudadanos, así como parcial satisfacción a estos requerimientos, aunque con tendencia al descenso, de acuerdo con expertos consultados para la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.**

Hasta el año 2014 el acceso a la información pública no gozaba de una ley en Colombia. Solo se le reglamentaba mediante la Ley 57 de 1985, que determina el deber de divulgación de los actos y decisiones de las autoridades públicas y algunos términos sobre hasta cuándo podría ser reservada una información (treinta años), así como con la Ley 594 de 2000, que dictamina que las entidades públicas deben administrar y custodiar su documentación en archivos públicos, entre otras que lo definían indirectamente (*Ibidem*, 2011).

Es en 2014 cuando entra en vigor la Ley 1712 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que establece disposiciones para que la información de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública esté a disposición de todos los ciudadanos, así como deberes en materia de publicación de

información y respuesta a solicitudes de información (Secretaría de Transparencia, 2014).

En Colombia existen organismos que facultan las solicitudes de acceso a la información pública de periodistas y ciudadanos, así como parcial satisfacción a estos requerimientos, aunque con tendencia al descenso, de acuerdo con expertos consultados para la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa. En la nación neogranadina, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley en la materia, según lo estipula el mismo texto legal, es el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales.

Se ha constatado que en las zonas más apartadas de la nación los medios periodísticos regionales enfrentan mayores problemas para acceder a la información pública, entre otras causas, debido a una presencia más débil del Estado y a precariedades en la inversión en adiestramiento en materia de transparencia para los funcionarios. (Cárdenas, H. Isaza, L. Bornacegli, I. Neira, O. Vergara A., 2022).

El acceso a la información pública en el país atraviesa, como derecho, presiones de diversa índole ya que en la nación neogranadina la situación política y social cuenta, entre otras complejidades, con la actuación de grupos irregulares.

## COSTA RICA

Costa Rica no cuenta con una situación difícil en materia de acceso a la información pública. El último capítulo en su horizonte en este sentido, fue la aprobación, en abril de 2022, de la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, votada de manera unánime por el Parlamento de ese país.

El texto reduce los plazos de respuesta de las instituciones para la entrega de información solicitada por ciudadanos y periodistas. De manera similar al modelo seguido por otras naciones que implementaron sugerencias de estándares de la Unesco y de ámbito internacional, dictamina que toda la Administración Pública Central, Descentralizada Institucional y Territorial y los demás entes de derecho público, así

como personas jurídicas de derecho privado que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios públicos, deberán responder a las solicitudes de información pública con algunas excepciones indicadas en la ley, tales como información considerada secreto de Estado, excluyendo de la declaratoria de secreto de Estado lo relativo a derechos fundamentales, los datos personales e información que ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona, entre otras, el secreto profesional y la información acumulada para la prevención de delitos.

La normativa aporta un dato interesante en la materia y es que reduce de diez a cinco días hábiles el plazo de respuesta para entregar la información solicitada por ciudadanos y a solo 48 horas para los medios de comunicación, aunque prorrogables por una única vez en un plazo de cinco días adicionales, de acuerdo con la complejidad de la solicitud. Solo pide el llenado de un formulario con la identidad de los solicitantes.

La aprobación de esta ley fue bien recibida por los expertos consultados en Costa Rica para la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que vieron una evolución positiva sobre el acceso a la información pública en ese país entre los periodos de las dos últimas mediciones, a saber, 2020-2021 y 2021-2022.

## CUBA

No existe en Cuba una ley de acceso a la información pública. El cronograma legislativo cubano incluye una discusión, para octubre próximo, sobre una Ley de Transparencia y Acceso a la Información (*Diario de Cuba*, 2022).

Miguel Alexis Fonseca-Ameller (2021), explora los antecedentes de la introducción de este principio en la Constitución de Cuba y señala que la Constitución de la Revolución de Guáimaro de 1869, la primera carta magna de esa nación, señalaba que: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo” (Constitución de Guáimaro, 1869).

A esa Constitución, le siguió la de La Yaya, de 1897, que en su artículo 13 dispuso que “... todos los cubanos tienen derecho a emitir con libertad sus ideas y a reunirse y asociarse para los fines lícitos de la vida”; la de 1901, en su artículo 25:

Toda persona podrá libremente y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de palabra o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las leyes, cuando por algunos de aquellos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública.

La de 1934, en su artículo 26:

Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura; sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las Leyes cuando por algunos de esos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública.

En la Constitución de 1940, en el artículo 33, se dejaba establecido que: “Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cuales quiera o todos los procedimientos de difusión disponibles.” En la carta magna subsiguiente, de 1942, se mantuvo este principio rector pero, en 1976, en una Cuba revolucionaria, se promulga una Constitución que daba un giro en su artículo 52, a propósito de la ideología estatal:

Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interesado de la sociedad.

Este artículo queda sin variaciones en las reformas constitucionales de 1992 y 2002.

## ESTUDIOS

Con la entrada en vigencia de la Constitución de Cuba de 2019 se estableció, en su artículo 53, que “... todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas” (Constitución de Cuba, 2018).

**En el presente, otra iniciativa genera polémica y preocupación en materia de acceso a la información pública en Guatemala. El Decreto 39-2022, aprobado el pasado 4 de agosto de 2022 por el Parlamento, ha sido señalado por algunos artículos como una posibilidad de que se imponga una mordaza digital.**

Mientras en naciones como Perú la norma sobre acceso a la información pública cuenta ya con veinte años, en Cuba será en octubre cuando se debata la referida ley. Desde junio de 2022, algunos medios independientes tales como *Diario de Cuba*, *Alas Tensas*, *Árbol Invertido*, *Cubanet*, *El Estornudo*, *El Toque*, *Hypermedia*, *Periodismo de Barrio*, *Rialta*, *Tremenda Nota* y la organización no gubernamental Alianza Cubana por la Inclusión, han realizado una campaña de difusión sobre la importancia de que esta ley agendada por el gobierno cubano, llegue, en efecto, a ser una realidad.

Consideran estas organizaciones que en una nación con el régimen que presenta Cuba, la norma no será garantía del acceso a la información pública, pero sí una vía para exigir data pública y rendición de cuentas (derechoasaber.com, 2022).

La duda es si el autoritarismo permite praxis sobre develación de asuntos de interés público para realmente democratizar al sistema político. Hasta ahora, esa no ha sido una realidad para el pueblo cubano y habrá que esperar cómo opera la transparencia y el hacer cumplir de manera independiente el texto legal a ser aprobado, así como los contenidos que condicionen la información que el Estado cubano estime clasificada.

## GUATEMALA

Al mes de agosto de 2022, Guatemala es escenario de una discusión sobre las garantías de acceso a la información pública, por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y diversos sectores de la vida pública.

En 2008, la nación había aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública, instrumento que, según representantes de la vida civil y organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, había significado un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Esta ley había sido aplaudida porque no solo reconocía el derecho de los ciudadanos a solicitar información, sino que además establecía obligatoriedad para que los organismos estatales publicaran información en portales electrónicos. Esta legislación le ponía pies al acceso, al establecer qué organismo sería garante de su cumplimiento, y en este caso se le asignó el rol a la Procuraduría de Derechos Humanos, entidad que creó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública.

No obstante, un cambio tuvo este instrumento legal en 2020, cuando se aprobó la iniciativa de reforma 5792. La iniciativa establecía la creación de una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, dependiente del Congreso, el cual asignaría a su director por mayoría simple; esto no cumple con ninguna de las garantías de independencia de la influencia del poder político, recomendado de acuerdo con estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la Organización de Estados Americanos.

En noviembre de 2020, la SIP cuestionó la reforma, indicando que en lugar de hacerla más operativa y eficiente, tendía a debilitarla. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, señalaron que el sistema de la Procuraduría era eficiente, toda vez que hubo 86.715 pedidos de información pública en 2019, muy superior a las 11.289 solicitudes del primer año de funcionamiento (SIP, 2020).

En el presente, otra iniciativa genera polémica y preocupación en materia de acceso a la información pública en Guatemala. El Decre-

to 39-2022, aprobado el pasado 4 de agosto de 2022 por el Parlamento, ha sido señalado por algunos artículos como una posibilidad de que se imponga una mordaza digital.

El artículo 19 del decreto se cita a continuación:

Comete delito de acoso por medios cibernéticos, la persona individual, grupo o grupo de delincuencia organizada, que públicamente, en el ámbito escolar, laboral u otro ámbito determinado, y en cualquiera de las formas de autoría establecidas en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas, lleve a cabo por medio de un sistema informático o sistemas que utilice tecnologías de la información y las comunicaciones, cualquiera o ambos de los supuestos siguientes:

a) Intimidar o asediar a una persona o grupo de personas con contenido falso o cruel, en posesión legítima o no del sujeto activo a través de las tecnologías de la información o comunicaciones, puede ser con la intención de ejercer dominio sobre la víctima, o para que esta realice actos contra su voluntad; o

b) Divulgar información confidencial de otra persona que afecten su honor o su salud física o psicológica, actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o cualquier medio de información electrónico.

(Artículo 19, Decreto 39-2022)

Se aprecia en el artículo la posibilidad de esconder, a criterio, cuáles serían estos contenidos supuestamente falsos, o cuáles aquellos que estarían en el ánimo de atentar “psicológicamente” contra un individuo.

## ECUADOR

Durante diez años, con el mandato de Rafael Correa, la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información fueron coartados en todo Ecuador. Persecución a periodistas y a los medios, censura en Internet y la creación de una ley mordaza fueron algunas de las circunstancias que afectaron el derecho de acceder a la información en el país.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) entró en vigencia en 2004. En ella se establece que el acceso a la información pública es gratuito, a excepción de los costos de reproducción. Para realizar la solicitud, la persona interesada debe hacer la misma por escrito ante el titular de la institución, haciendo constar “... en forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud” (Art. 19), la información debe entregarse en diez días, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más. Esa inclusión no está acorde con estándares internacionales, según los cuales no habría que justificar el pedido y sería suficiente identificar al solicitante.

**Aunque esta ley fue reconocida por ser la más moderna de la región, nunca se creó una institución independiente del Estado que velara por el derecho al libre acceso a la información pública y la transparencia, asignándose esto entre las funciones de la Defensoría del Pueblo.**

Añadido a esto, toda institución debe contar con un portal de información en el que tiene que difundir obligatoriamente una información mínima actualizada para garantizar la transparencia. Los funcionarios que omitan o denieguen el acceso a la información podrán ser sancionados con multas, suspensiones de sus funciones e incluso la destitución del cargo.

Aunque esta ley fue reconocida por ser la más moderna de la región, nunca se creó una institución independiente del Estado que velara por el derecho al libre acceso a la información pública y la transparencia, asignándose esto entre las funciones de la Defensoría del Pueblo. Esta situación, según el abogado Pedro Valverde, ocasiona que el acceso a la información sea “letra muerta” dentro de las leyes de Ecuador (Valverde, 2022).

En 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), también conocida como *ley mordaza*, que fue criticada por la ONU y la CIDH. Esta ley estaba plagada de artículos preocupantes como el 17, que establece

## ESTUDIOS

que el Estado debía garantizar el derecho a la verdad, prohibiendo la divulgación de “información falsa”, lo que permitía que el gobierno clasificara de verdad o mentira la información a su conveniencia (*Infobae*, 2022). El gobierno de Correa también aprobó en la LOC la creación de la Superintendencia de Comunicación. (Supercom), organismo que sirvió para controlar y ejercer censura contra los medios de comunicación y que fue eliminado en 2019, tras las reformas realizadas a la LOC por el presidente Lenín Moreno. Pero durante sus pocos años de gestión, esta institución “... abrió 1.188 procesos administrativos en contra de medios de comunicación, de los cuales 706 terminaron en sanción” (*Radio Pichincha*, 2020).

**Fundamedios alertaba que durante 2021 se registraron 35 alertas por violaciones al derecho al acceso de información, de estas, dieciséis fueron por obstrucción al trabajo periodístico y diecinueve por omisión, entrega incompleta de la información y negativa.**

Posteriormente, el presidente Guillermo Lasso planteó la reforma de esta ley, optando por un veto parcial: de sus dieciocho objeciones por inconstitucionalidad, doce fueron aprobadas por la Corte Constitucional del país (*Infobae*, 2022). Esto ocurre porque, para mediados de 2022, la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES) buscaba regresar a la ley mordaza en la Asamblea Nacional, lo que alertó a diversas ONG tanto a escala nacional como internacional (*La Hora*, 2022).

Este texto, aprobado por el Poder Legislativo, fue rechazado por el Ejecutivo porque “... intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución” (*El Universo*, 2022). Ante esta situación, diferentes organizaciones como la Unión Nacional de Periodistas y Fundamedios, e incluso instituciones estatales como el Consejo de Comunicación, solicitaron que la presidencia “aplique un veto total a estas reformas” (Fundamedios, 2022).

Aun así, esto no significa que el acceso a la información pública y la transparencia estén bien salvaguardados en la práctica en esa nación. Fundamedios destaca que en 2009 se enviaron 69 solicitudes a diversas instituciones estatales y de estas, solo siete entregaron la información completa. Asimismo, para 2015 con su estudio *La consolidación de una cultura de opacidad: medición de la transparencia en el sector público ecuatoriano*, Fundamedios observó que de 74 solicitudes enviadas a 37 instituciones, cuatro fueron denegadas (una hecha a nombre de Fundamedios y tres de ciudadanos), solo 35 fueron contestadas y de esas, únicamente diez entregaron la información completa. Más adelante, para 2022, realizaron otro informe en el que afirmaban que el país aún continuaba con la cultura del secreto, y que “... el acceso completo a datos que reposan en instituciones públicas sigue siendo una utopía” (Fundamedios, 2022).

Fundamedios alertaba que durante 2021 se registraron 35 alertas por violaciones al derecho al acceso de información, de estas, dieciséis fueron por obstrucción al trabajo periodístico y diecinueve por omisión, entrega incompleta de la información y negativa. Entre los casos que se detallan en el informe destacan: el ocultamiento de información sobre la COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, la obstrucción de la Contraloría General ante el interés de los medios de acceder a información sobre el patrimonio público y, por último, la negativa, por otro año más, de la desclasificación de los documentos relacionados con el caso de secuestro y asesinato del equipo del diario *El Comercio* en 2018. Este informe también revelaba que las alertas se triplicaron en comparación con el año 2020 y que seguía el abuso de la categoría de “información reservada” por parte de las instituciones (Fundamedios, 2022).

## EL SALVADOR

El 8 de abril de 2011, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador sancionó el Decreto N° 534, la Ley de Acceso a la Información Pública. En su primer considerando, el le-

gislativo de entonces citaba, prácticamente, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “... toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 19).

También aludía el texto a contenidos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, reconociendo que la transparencia, el derecho al acceso a la información pública, a la participación ciudadana y la obligatoriedad de las autoridades a rendir cuentas de la gestión pública, son necesarios para prevenir y sancionar actos de corrupción (Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, 2011).

Entre los principios que demarca su legislación en la materia para la interpretación de sus artículos, rigen la máxima publicidad, la disponibilidad, la prontitud, la veracidad, la igualdad, la sencillez, pero incluso la gratuidad, yendo más adelante que otras legislaciones de su tipo. Coincide con otras legislaciones en la materia, como la de Perú, en lo referente a lo que debe permanecer clasificado. Así lo destaca en su artículo 19:

Es información reservada: a. Los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 168 ordinal 7° de la Constitución. b. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. c. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país. d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. e. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. f. La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes. g. La que comprometiére las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso. h. La que pueda

generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.

(Artículo 19, Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador)

El ente encargado de cumplir y hacer cumplir los estatutos de esta ley es el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero se señala que están obligados a cumplirla, “... los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general”.

El conflicto en El Salvador no deviene, entonces, de la tipología de su entramado legal en torno al acceso a la información pública. De acuerdo con informes de la ONG Acción Ciudadana, en relatoría difundida en agosto de 2022, el problema ha radicado en el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha evidenciado, de acuerdo con sus cifras, una disminución significativa en el número de casos resueltos y una “amplia reducción de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano”, “en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información”. De acuerdo con la ley, los ciudadanos pueden apelar a este instituto, si algún organismo se niega a entregar información pública (Acción Ciudadana, 2022).

Tal como se sugiere en estándares internacionales, el directorio del organismo encargado debería estar conformado por cinco consejeros, tal como ocurre en El Salvador, donde la designación es potestad del presidente de la República, a partir de un proceso de consultas y candidaturas por parte de la sociedad civil y académica experta.

Según ONG salvadoreñas, existen irregularidades en torno al directorio del instituto a cargo. En febrero de 2022, la comisionada de la entidad, Liduvina Escobar, denunció su remoción y señaló que el proceso de destitución fue arbitrario.

## ESTUDIOS

## LEÓN HERNÁNDEZ

Periodista, profesor universitario, investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador del Observatorio Venezolano de *Fake News*, miembro de la cohorte 2016-2017 del programa Next Generation Leaders del McCain Institute de la Universidad de Arizona. Miembro del Consejo de Redacción de la revista *Comunicación*.

## CARLA ZAMBRANO

Estudiante de Comunicación Social de la UCAB. Asistente de investigación del Centro de Investigación de la Comunicación-UCAB (CIC-UCAB).

## Referencias

## INTRODUCCIÓN

- Constitución de España de 1812. (s. f.): Congreso.es. Recuperado 31 de agosto de 2022, de [https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons\\_1812.pdf](https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf)
- ESTRADA, C., A. (2004): "El acceso a la información pública: un acercamiento doctrinal". En: *Infobib No 3*. Pp. 169-189. Recuperado 18 de agosto de 2022, de [http://eprints.rclis.org/7991/1/Estrada\\_Acceso\\_Inf\\_Publica.pdf](http://eprints.rclis.org/7991/1/Estrada_Acceso_Inf_Publica.pdf)
- NOVOA, C., Y. L. (2016): "El derecho de acceso a la información pública: contenido e importancia". En: *Forseti*, número 1. Recuperado 11 de enero de 2023, de <https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1124>
- OEA. (2013): *Acceso a la Información Pública: un derecho para ejercer otros derechos*. Oas.org. Recuperado el 03 de enero de 2023, de: <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf>
- OEA. (2010): *Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública*. Oas.org. Recuperado el 03 de enero de 2023, de [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES\\_2607\\_XL-O-10.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf)
- OEA. (2016): *Los órganos de Supervisión del derecho al acceso a la información pública*. Oas.org. Recuperado el 03 de enero de 2023, de <http://www.oas.org/es/cidh/expressions/docs/publicaciones/AccessoES.pdf>
- Transparencia Internacional. (2022, enero 25): *El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos diez años, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia* - Press Transparency.org: <https://www.transparency.org/es/press/2021-corruption-perceptions-index-press-release>
- Wikipedia contributors. (s. f.): *Constitución española de 1812*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado 31 de agosto de 2022, de [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n\\_espa%C3%B1ola\\_de\\_1812&oldid=145658058](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1812&oldid=145658058)

## ARGENTINA

- Acceso a la información pública*. (2019, julio 12): Argentina. gob.ar. Recuperada 18 de agosto de 2022, de <https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/acceso-la-informacion-publica>
- Acceso a la información pública*. (s. f.): Gob.ar. Recuperado 04 de octubre de 2022, de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm>
- Acceso a la información pública*. (2019, julio 12): Argentina. gob.ar. <https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/acceso-la-informacion-publica>
- BELTRÁN, A. F. (2022, marzo 16): "Hallaron problemas en la gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública". En: *El Auditor*. Recuperado 04 de octubre de 2022, de: [https://elauditor.info/informes-de-auditoria/hallaron-problemas-en-la-gestion-de-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica\\_a622a7508992f8f23b48e1e1f](https://elauditor.info/informes-de-auditoria/hallaron-problemas-en-la-gestion-de-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica_a622a7508992f8f23b48e1e1f)
- BORDONI, H. (2021, marzo 25): "Crítico informe de la Fundación LED sobre libertad de expresión y DD.HH." En: *Formosa*. Perfil. Recuperado 04 de octubre de 2022, de: <https://www.perfil.com/noticias/actualidad/critico-informe-de-la-fundacion-led-sobre-la-libertad-de-expresion-y-los-ddhh-en-formosa.phtml>
- Constitución de las provincias unidas en sudamérica de 1819 (22 de abril de 1819) Sección Primera (s.f.)*: Unam.mx. Recuperado 05 de octubre de 2022, de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2113/13.pdf>
- De, C., & Nacion, L. A. (s. f.): Gob.ar. Recuperado 04 de octubre de 2022, de [https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/institucional/constitucion\\_nacional\\_argentina.pdf](https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/institucional/constitucion_nacional_argentina.pdf)
- Informe especial restricciones a la libertad de expresion provincia de formosa*. (2021): Fundacionled.org. Recuperado 04 de octubre de 2022, de: <http://fundacionled.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Especial-Formosa-2021.pdf>
- Ley 27.275 Acceso a la Información Pública de Argentina*. (s. f.). Cepal.org. Recuperado 05 de octubre de 2022, de <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-27275-acceso-la-informacion-publica-de-argentina>
- OYHANARTE, M., y KANTOR, M. (s. f.): *El derecho de acceso a la información pública en la Argentina. Un análisis de su situación normativa y su efectividad*. Poderciudadano.org. Recuperado 05 de octubre de 2022, de [https://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2016/04/Libro\\_PoderCiudadano\\_CapVII-Acceso-a-la-informacion-publica.pdf](https://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2016/04/Libro_PoderCiudadano_CapVII-Acceso-a-la-informacion-publica.pdf)
- Wikipedia contributors. (s. f.): *Constitución de la Nación Argentina*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado 05 de octubre de 2022, de: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n\\_de\\_la\\_Naci%C3%B3n\\_Argentina&oldid=146353875](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina&oldid=146353875)

## BOLIVIA

- Nueva Constitución Política del Estado*. (2008): Oas.org. Recuperado 01 de enero de 2023, de: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_blv\\_constpolitica.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_constpolitica.pdf)

## BRASIL

Amnistía Internacional. (s. f.): *Brasil*. Amnesty.org. Recuperado el 05 de enero de 2023, de: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/brasil/>

BORGES, E.V.E., MARTÍNEZ-ÁVILA, D., y RODRIGUES, M. (2020). Las limitaciones de la Ley de Acceso a la Información en Brasil: reflexiones teóricas en el ámbito de la ciencia de la información. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Recuperado el 10 de diciembre de 2022, de: <https://doi.org/10.1590/1981-5344/3906>

SIMÕES, E. (2019, febrero 27): E. Bolsonaro revoga decreto que delegava definição de sigilo a comissionados. Globo.com. Recuperado el 10 de diciembre de 2022, de <https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-revoga-decreto-que-delegava-definicao-de-sigilo-comissionados-23484466.html>

SIP. (2022): *Brasil: la libertad de expresión resiste*. Indicede-chapultepec.com. Recuperado el 04 de enero de 2023, de: <https://doi.org/10.1177/1750481317691838>

## CANADÁ

*Access to Information Act*. (s. f.): Oas.org. Recuperado 15 de octubre de 2022, de [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso\\_informacion\\_base\\_dc\\_leyes\\_pais\\_C\\_2.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_C_2.pdf)

CARDOSO, T., y DOOLITTLE, R. (2022, octubre 6): "Ottawa spent \$90-million in 2021 on strained access-to-information program". En: *The Globe and Mail*. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-federal-hearings-begin-canada-access-to-information-system-secret/>

*Democratizing data: new interactive map empowers Canadians to access immigration data*. (s. f.): News. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://news.usask.ca/articles/research/2022/democratizing-data-new-interactive-map-empowers-canadians-to-access-immigration-data.php>

NICHOLS, M. A., MELL, L. K., Macdermed, D., WITT, M. E., WEICHSELBAUM, R. R., y CHMURA, S. J. (2006): Canada. *International Journal of Radiation Oncology, Biology*. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2006.07.423>

OpenMedia. (s. f.): *Right to know week & Canada's broken access to information system*. Openmedia.org. Recuperado 15 de octubre de 2022, de: <https://openmedia.org/article/item/right-to-know-week>

Quebec journalists federation calls for access to information law overhaul. (s. f.): *CBC News*. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-journalists-federation-access-to-information-law-1.6374689>

## CHILE

CARRASCO, R. (2022, abril 22): "Convención: avanzan las normas sobre transparencia, probidad y el acceso a la información pública". En: *Diario Financiero*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.df.cl/df-constitucional/convencion-avanzan-las-normas-sobre-transparencia-probidad-y-el-acceso>

HANSEN, H. (2011, abril 5): "Aún persisten las barreras y obstáculos al acceso de la información pública". En: *El Mostrador*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/04/05/aun-persisten-las-barreras-y-obstaculos-al-acceso-de-la-informacion-publica/>

*Informe "Libertad de expresión en Chile expone reiteradas agresiones a la prensa por parte de agentes del Estado" - Universidad de Chile*. (2022, julio 14): Uchile.cl. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.uchile.cl/noticias/188247/u-de-chile-presenta-informe-libertad-de-expresion-en-chile-2021>

*Ley Núm. 20.285 sobre acceso a la información pública*. (s. f.): Oas.org. Recuperado 19 de octubre de 2022, de [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso\\_informacion\\_base\\_dc\\_leyes\\_pais\\_CH\\_2.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_CH_2.pdf)

LOEBENSTEIN, E. von (2021, noviembre 24). *CPLT planteó necesidad de reconocer el derecho de acceso a información pública como un derecho humano fundamental en nueva Constitución*. *Diario Constitucional*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.diarioconstitucional.cl/2021/11/24/cplt-planteo-necesidad-de-reconocer-el-derecho-de-acceso-a-informacion-publica-como-un-derecho-humano-fundamental-en-nueva-constitucion/>

MOSTRADOR, E. (2020, enero 22): "El estudio que denuncia obstrucción a la prensa y censura en redes sociales durante el estallido social". En: *El Mostrador*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/22/el-estudio-que-denuncia-obstruccion-a-la-prensa-y-censura-en-redes-sociales-durante-el-estallido-social/>

## COLOMBIA

CÁRDENAS, H., ISAZA, L., BORNACELLI, I., NEIRA, O., VERGARA, A. (2022, septiembre 30): "Periodismo, Acceso a la Información y Desigualdad". En: *La cola de la rata*. Recuperado el 5 de enero de 2023, de <https://www.lacoladerata.co/cultura/analisis/periodismo-acceso-a-la-informacion-y-desigualdad/>

FLIP. (2011): *El acceso a la información pública en Colombia: entre el secreto y la filtración*. Fundación para la Libertad de Prensa. Recuperado 04 de enero de 2023, de <https://www.flip.org.co/images/Documentos/El-acceso-a-la-informacion-en-Colombia-Entre-el-secreto-y-la-filtracion.pdf>

Fundación para la Libertad de Prensa. (2011): *El acceso a la información pública en Colombia, entre el secreto y la filtración*. Recuperado el 05 de enero de 2023, de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewid87-1v7H8AhXBRTA-BHws2Dh8QFnoECC4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.flip.org.co%2Fimagenes%2FDocumentos%2FEl-acceso-a-la-informacion-en-Colombia-Entre-el-secreto-y-la-filtracion.pdf&usg=AOvVaw0yJCSeoWU1stKEP-NLHn3UT>

Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República (2014): *ABC Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional*. Recuperado el 5 de enero de 2023, de [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjs9sHuyr-H8AhVMZzABHafB\\_kQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.minjusticia.gov.co%2Fprogramas-co%2Ftejiendo-justicia%2FDocuments%2Fpublicaciones%2Ftransparencia%2FABC.pdf&usg=AOvVaw3StN-y9HPoM4IG\\_v3DYW8Ms](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjs9sHuyr-H8AhVMZzABHafB_kQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.minjusticia.gov.co%2Fprogramas-co%2Ftejiendo-justicia%2FDocuments%2Fpublicaciones%2Ftransparencia%2FABC.pdf&usg=AOvVaw3StN-y9HPoM4IG_v3DYW8Ms)

## ESTUDIOS

## CUBA

DDC. (2022, agosto 7): “Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Cuba: tenemos derecho a saber, contrastar y elegir”. En: *Diario de Cuba*. Recuperado 31 agosto de 2022, de [https://diariodecuba.com/cuba/1659534245=\\_41356.html](https://diariodecuba.com/cuba/1659534245=_41356.html)

*Derecho a Saber*. (2022, junio 20): Derecho a Saber. Recuperado 01 de septiembre de 2022, de: <https://www.derechoa-saber.com/>

FONSECA-AMELLER, M. A. (2021): “Derecho del acceso a la información como forma de participación ciudadana, su consagración en la constitución cubana”. En: *Innovación tecnológica* (Las Tunas), 27(1), 1–12. Recuperado 31 de agosto de 2022, de <http://portal.amelica.org/ameli/journal/442/4422091002/html/>

Wikipedia contributors. (2022, 23 de agosto): *Asamblea de Guáimaro*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado 29 agosto de 2022, de [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asamblea\\_de\\_Gu%C3%A1imaro&oldid=145547630](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asamblea_de_Gu%C3%A1imaro&oldid=145547630)

## ECUADOR

CRUZ, V. S. (2022, julio 22): “Gobierno calificó de ‘mordaza’ a la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea”. En: *El Universo*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/gobierno-califico-de-mordaza-a-la-ley-de-comunicacion-aprobada-por-la-asamblea-nota/>

*El eterno laberinto de la información pública*. (2022, abril 20): Fundamedios. Recuperado 17 de octubre de 2022, de [https://www.fundamedios.org.ec/el-eterno-laberinto-de-la-informacion-publica/?\\_ga=2.58126312.378811576.1666542565-143904625.1666542565&\\_gl=1\\*1kfsycz\\*\\_ga\\*MTQzOTA0NjI1LjE2NjY1NDI1NjU.\\*\\_ga\\_C6DH226G1N\\*MTY2NjU0MjU2NC4xLjEuMTY2NjU0MjU3NS4wLjAuMA](https://www.fundamedios.org.ec/el-eterno-laberinto-de-la-informacion-publica/?_ga=2.58126312.378811576.1666542565-143904625.1666542565&_gl=1*1kfsycz*_ga*MTQzOTA0NjI1LjE2NjY1NDI1NjU.*_ga_C6DH226G1N*MTY2NjU0MjU2NC4xLjEuMTY2NjU0MjU3NS4wLjAuMA)

¿En qué consiste la Ley de Comunicación de Ecuador? (s. f.): *Notimerica.com*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.notimerica.com/politica/noticia-consiste-ley-comunicacion-ecuador-20161104124538.html>

GARCÍA, A. (s. f.): “La Supercom deja de existir este miércoles 31 de julio del 2019”. En: *Elcomercio.com*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/liquidacion-supercom-consejo-informacion-comunicacion.html>

*HITO 10: Alertamos sobre las restricciones en el acceso a la información pública*. (2022, mayo 19): Fundamedios.

Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.fundamedios.org.ec/hito-10-alertamos-sobre-las-restricciones-en-el-acceso-a-la-informacion-publica/>

Informativas, L. (2022, agosto 16): *Múltiples voces en Ecuador exigen al Presidente un VETO TOTAL a la nueva ‘Ley Mordaza’*. Fundamedios. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.fundamedios.org.ec/multiples-vozes-en-ecuador-exigen-al-presidente-un-veto-total-a-la-nueva-ley-mordaza/>

La Corte Constitucional del Ecuador aceptó la mayoría de las objeciones presentadas por Lasso sobre la “Ley mordaza”. (2022, octubre 5): *Infobae*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/05/la-corte-constitucional-del-ecuador-acepto-la-mayoria-de-las-objeciones-presentadas-por-lasso-sobre-la-ley-mordaza/>

*Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública*. (s. f.): Oas.org. Recuperado 17 de octubre de 2022, de [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso\\_informacion\\_base\\_dc\\_leyes\\_pais\\_E\\_2.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_E_2.pdf)

*UNES y sus aliados buscan votos para una Ley de Comunicación con censura previa*. (s. f.): Com.ec. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.lahora.com.ec/pais/informe-minoria-votacion-asamblea-nacional-ley-comunicacion/>

VALVERDE RIVERA, P. X. (2022, junio 15): “Falta acceso a la información”. En: *El Universo*. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/falta-acceso-a-la-informacion-nota/>

## EL SALVADOR

Acción Ciudadana. (2020, julio 24): *El derecho de acceso a la información pública está en riesgo*. Accion-ciudadana.org; Acción Ciudadana. Recuperado 25 de agosto de 2022, de <https://accion-ciudadana.org/el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-esta-en-riesgo/>

*Ley de Acceso a la Información Pública*. (2011): Congreso de la República de El Salvador. Recuperado 25 de agosto de 2022, de <https://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica.pdf>

RODRÍGUEZ, M. (2022, julio 27): “19 instituciones estatales reprueban en cumplimiento al acceso a la información durante 2021, señala informe de la UCA”. En: *Noticias de El Salvador*. Recuperado 26 de agosto de 2022, de <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/instituciones-acceso-informacion-publica-uca/981533/2022/>